



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinte (2020)

| | |
|--------------------------|--|
| RADICACIÓN: | 11001-33-35-026-2019-00508-00 |
| MEDIO DE CONTROL: | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| DEMANDANTE: | HECTOR DE JESUS PEREZ GRAJALES Y OTROS |
| DEMANDADA: | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, y FIDUPREVISORA S.A |

A través de memorial obrante a folios 177 a 182, la apoderada judicial de la parte actora interpuso y sustentó recurso de reposición contra el auto proferido por este Despacho, en virtud del cual se inadmitió la demanda (fls.173-176).

Conforme a lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto, con el objeto de determinar la concesión del mismo, de acuerdo con las siguientes,

CONSIDERACIONES

i. Del recurso de reposición

En primer lugar, frente al recurso de reposición, se observa que el art. 242 del C.P.A.C.A., establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. *Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

Visto lo anterior, es claro que el recurso de reposición solo procede contra las decisiones que no son susceptibles del recurso de apelación, tal como ocurre en el presente asunto.

Así pues, y conforme a lo definido en el inciso segundo del artículo 242 del C.P.A.C.A.¹, es preciso manifestar que en tratándose del recurso de reposición,

¹ **Artículo 242. Reposición.** *Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*
En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.(...)”

“ARTÍCULO 319. TRÁMITE. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

Subraya fuera de texto

En este orden de ideas, como el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término legal, el Despacho encuentra que el mismo es procedente y por consiguiente, es viable resolverlo.

Recuerda el Despacho, que en el presente asunto, al evidenciar que no se cumplían los presupuestos de acumulación de pretensiones, **(i)** se dispuso conocer, únicamente la presente demanda, respecto del primer demandante, **HECTOR DE JESUS PEREZ GRAJALES**, y **(ii)** se conminó a la apoderada a escindir la demanda, realizando para el efecto el desglose de los documentos que requiriese para presentar las demandas individuales de las demás personas, es decir, de los (as) señores (as) **MIREYA STELLA DE JESÚS BARRETO REYES, ANA CECILA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANA CLOTILDE VELANDIA DE JAIME, MIGUEL EDUARDO JAIME CASTRO, GLORÍA INES VELÁSQUEZ ARGUELLO DE OROZCO, NELSY YANIRE GUERRERO MOLINA, JAIRO ESTEBÁN SÁNCHEZ PALENCIA, ELVIA LUZ BASTIDAS GARCIA E IRMA PATRICIA AGUDELO VIEDA.**

Así las cosas, al solo disponer conocerse la demanda respecto del señor **HECTOR DE JESUS PEREZ GRAJALES**, y **(iii)** al evidenciar que no se cumplían los presupuestos de admisibilidad de la demanda conforme al artículo 162 del C.P.A.C.A., este Despacho, resolvió inadmitir la demanda.

Pues bien, el motivo de inconformidad del apoderado, con el auto que dispuso a inadmitir la demanda, radica en lo siguiente:

“(...)

De acuerdo a lo expuesto en la jurisprudencia en cita, es claro que si es procedente adelantar el proceso conociendo el juez de instancia cada una de las pretensiones que se solicitan en nombre de mis representados porque de no hacerlo tal como lo indicó el Consejo de Estado y el Tribunal en el auto que también se citó, afirmar que no es posible la acumulación de pretensiones de un medio de control, por varios demandantes porque tal posibilidad no está expresamente prevista en el artículo 165 del C.P.A.C.A., desborda postulados mínimos de interpretación jurídica, pues no corresponde a la finalidad del mismo y se desconocerían principios como el de economía procesal, celeridad e igualdad entre otros. Se desconoce, además, lo establecido en el artículo 8 del Código General del Proceso referente a la acumulación de pretensiones.

De igual forma, en fallo del 10 de octubre del 2019, radicado 11001333502420180056201, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, M.p. Dr. SAMUEL JOSE RAMIREZ POVEDA, indica entre otras cosas lo siguiente:

(...)

“En efecto, si bien es cierto que hay circunstancias que posiblemente difieran entre cada uno de los demandante, entre ellas, peticiones y actos separados proferidos por las entidades demandadas, pero con solicitudes y respuesta similares, esto es por un lado requiriendo los descuentos y sus posteriores reintegros de los aportes al sistema de seguridad social en salud de las mesadas adicionales de junio y diciembre y por el otro , que las entidades demandadas, negaran dichas solicitudes, es preciso señalar que la demandas se ordena en los mismos hechos, se persiguen idénticas condenas, se desempeñaron todos como docentes oficiales, los cargos elevados contra los actos administrativos son iguales, razón por la que la interpretación normativa que sobre el tema realice el juez aplica en igualdad de condiciones para todos los solicitantes. Es decir, resulta totalmente viable estudiar en conjunto la situación de los demandantes.

Aunado a lo anterior, el actual sistema oral busca dar prevalencia a los principios de economía celeridad en los procesos, ya juicio del Despacho, la mejor manera de dar efectividad a los mismo, es tramitando y resolviendo conjuntamente las pretensiones d ellos aquí demandante, y no, obligarlos a presentar diferentes demandas que a la postre lo único que logran es congestionar la justicia.”

Ahora bien, frente al caso *sub lite*, como primera medida se debe decir que, el apoderado judicial de los demandantes, ampara la presentación de la demanda, en la cual hay una pluralidad de demandantes y, una pluralidad, o acumulación de pretensiones, bajo los parámetros del art. 165 del C.P.A.C.A., el cual preceptúa lo siguiente:

“Artículo. 165.- Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular las pretensiones de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la jurisdicción contencioso administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas,
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.”

Como bien se expuso en auto del 11 de marzo de 2019, para el Despacho, el precitado artículo, ha de entenderse e interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 88 del C.G.P., toda vez que el presente asunto, no solo trata de una pluralidad de pretensiones, como son la nulidad de actos administrativos, y configuración de acto ficto o presunto negativo frente a peticiones antes la administración, sino que trata de una multiplicidad de demandantes, que pretenden, la nulidad de distintos actos administrativos, que produjeron, sobre cada uno de ellos, efectos particulares e individuales.

De acuerdo con las particularidades del presente caso, entendidas estas como: **1)** pluralidad y acumulación de pretensiones, **2)** pluralidad de demandantes, **3)** pluralidad de demandados, este encasilla dentro de los supuestos fácticos previstos en el artículo 88 del C.G.P.; precepto legal al que por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 del 2011, debe acudir para hacer el análisis del sub examine. Artículo del C.G.P. que expresa:

“Artículo 88. Acumulación de pretensiones. (...)

También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando provengan de la misma causa.*
- b) Cuando versen sobre el mismo objeto.*
- c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.*
- d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.*

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado.”

Frente a la acumulación de pretensiones y pluralidad de sujetos demandantes, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia del 23 de febrero del 2012, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero; Radicación No.0317-08; estableció:

“La acumulación de pretensiones, entonces, además de ser un instrumento en beneficio de la garantía del acceso a la administración de justicia de una forma ágil y eficiente, al tenor de lo dispuesto en la disposición normativa citada puede ser, en principio, de dos tipos: (1) objetivo, caso en el cual un demandante formula varias pretensiones frente a un demandado; y (2) subjetivo, evento en el cual hay pluralidad de demandantes y/o demandados. En este último caso, supuesto aplicable al sub júdece, se requiere acreditar: (a) identidad de causa, o (b) identidad de objeto, o (c) una relación de dependencia, o (d) que se sirvan de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.”.

Ahora bien, puede decirse sin hesitación alguna, que en el presente caso al haber pluralidad de demandantes y demandados, el supuesto aplicable es la acumulación de pretensiones subjetiva, para el cual debe acreditarse: **(i) identidad de causa, o (ii) identidad de objeto, o (iii) una relación de dependencia, o (iv) que se sirvan de unas mismas pruebas, tal cual lo expresó la alta corporación.**

Frente a este punto, el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, encontrándose para resolver apelación contra el auto que dispuso rechazar la demanda dentro del expediente 11001-33-35-026-2018-00562-00, que cursa en este Despacho, dispuso:

“Por su parte, sobre la acumulación de pretensiones, el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación numero 05001-23-31-000-2000-02781-01 (0317-08), Consejero ponente: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, señaló:

“La acumulación de pretensiones, entonces, se ser un instrumento en beneficio de la garantía del acceso a la administración de justicia de una forma ágil y eficiente, al tenor de lo expuesto en la disposición normativa citada puede ser, en principio, de dos tipos: (1) objetivo, caso en el cual un demandante formula varias pretensiones frente a un demandante; y (2) subjetivo, evento en el cual hay pluralidad de demandante y/o demandados.

En este último caso, supuesto aplicable al sub judice, se requiere acreditar: (a) identidad de causa, o (b) identidad de objeto, o (c) una relación de dependencia, o (d) que se sirvan de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.”

En ese orden de ideas, en el caso bajo estudio se observa que existe una acumulación subjetiva de pretensiones, si se tiene en cuenta que estas fueron formuladas por varias personas y dirigidas contra la misma demandada.

La acumulación subjetiva es procedente siempre que se cumplan los requisitos del artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que en casos de pluralidad de demandante, haya entidad de causa, o de objeto, o una relación de dependencia, o que sirvan los mismos elementos probatorios, asía sea diferente el interés de uno y otros, lo cual se da en el sub lite, como se verá.

Por consiguiente, no lo asiste la razón al Juez de primera instancia al rechazar la demanda, por cuanto los demandantes no la representaron por separado, requerimiento que adoptó el A quo frente a la indebida acumulación de pretensiones que consideró se presentaba.

En efecto, si bien es cierto que hay circunstancias que posiblemente difieran entre cada uno de los demandantes, entre ellas, peticiones y actos separados proferidos por las entidades demandad, pero con solicitudes y respuesta similares, esto es, por un lado, requiriendo los descuentos, y sus posteriores reintegros, de los aportes al sistema de seguridad social en salud de las mesad adicionales de junio y diciembre y , por el otro, que las entidades demandad, negaran dichas solicitudes, es preciso señalar que la demanda se origina en los mismos hechos, se persiguen idénticas condenas, se desempeñaron todos como docentes oficiales, los cargos elevados contra los actos administrativos son iguales, razón por la que la interpretación normativa que sobre el tema realice el Juez aplica en igualdad de condiciones para todos los solicitantes. Es decir, resulta totalmente viable estudiar en conjunto la situación de las demandantes.

Aunado a lo anterior, el actual sistema oral busca dar prevalencia a los principios de economía y celeridad en los procesos, y a juicio del Despacho, la mejor manera de dar efectividad a los mismos, es tramitando y resolviendo conjuntamente las pretensiones

de los aquí demandantes, y no, obligarlos a presentar diferentes demandad que a la postre lo único que logran es congestionar la justicia (...)"

Negrilla y subraya fuera de texto

Así mismo, cabe recordar que en la misma línea se pronunció el Consejo de Estado en sentencia de 12 de febrero de 2015 (M.P. María Elizabeth García González), al examinar el problema jurídico que en esta ocasión vuelve a plantearse, con ocasión de acción de tutela interpuesta por docentes al servicio del Departamento de Cundinamarca, con supuestos fácticos y jurídicos análogos a los del caso sub-examine. En dicho pronunciamiento, respecto del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, aplicable a la acumulación subjetiva de pretensiones, se dispuso:

“La acumulación de pretensiones, entonces, además de ser un instrumento en beneficio de la garantía del acceso a la administración de justicia de una forma ágil y eficiente, al tenor de lo dispuesto en la disposición normativa citada puede ser, en principio, de dos tipos: (1) objetivo, caso en el cual un demandante formula varias pretensiones frente a un demandado; y (2) subjetivo, evento en el cual hay pluralidad de demandantes y/o demandados. En este último caso, supuesto aplicable al sub júdice, se requiere acreditar: (a) identidad de causa, o (b) identidad de objeto, o (c) una relación de dependencia, o (d) que se sirvan de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros. En el caso en estudio se observa que todos los demandantes reclamaron la nulidad del acto administrativo No. 538 de 17 de febrero de 2000; que todos solicitaron, a título de restablecimiento, idénticas condenas; que desempeñaron un empleo similar, esto es, el de Técnico y que los cargos elevados contra el acto demandado son idénticos; razón por la cual, puede concluirse a la luz de lo dispuesto en la normatividad referida y de lo ordenado por el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, que en el presente asunto no se configura una indebida acumulación de pretensiones.”

En sentido similar, sobre el objeto o finalidad de la acumulación de pretensiones, dijo la Corporación:

“En virtud del principio de economía procesal la ley autoriza la acumulación de pretensiones, dicha institución procesal permite la unión de varias pretensiones en una misma demanda, con el objeto de evitar a los sujetos procesales trámites que resultarían engorrosos, en razón a que bajo unos requisitos el juez se puede pronunciar sobre los mismos derechos en una misma providencia, evitando decisiones particulares contradictorias. La acumulación en el proceso administrativo, está prevista en el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual hace una remisión en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, cuerpo normativo que consagra dicha figura en el artículo 82. En efecto, los motivos expuestos como de ilegalidad de los actos demandados son homogéneos, pues la demanda se fundamenta en una razón principal y es la que los actos administrativos que originaron la desvinculación, fueron expedidos con violación de las normas legales que reglamentan su expedición, tales como la falta de motivación y las fallas en el estudio técnico, sin que se aleguen situaciones especiales de carácter particular que hagan imposible el estudio conjunto de las alegadas y que lleven a la conclusión de que por ser tan disímiles deberían ser resueltas en procesos diferentes.”.

Dicho lineamiento Jurisprudencial se desarrolló en vigencia del Código Contencioso Administrativo, el cual permitía aplicar, por remisión, el C. de P.C. Pero ocurre que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que reguló la materia, desapareció, se repite, en virtud del

Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 11001-33-35-026-2019-00508-00

Principio de Especialidad, la posibilidad de aplicar el artículo 82 del C. de P.C., que establecía requisitos para la acumulación de pretensiones.

Por lo anterior, la Jurisprudencia de esta Corporación ha comenzado a precisar el alcance de la nueva normativa, de la siguiente manera:

“En cuanto a la aplicación adecuada de la figura de acumulación de pretensiones, es preciso verificar la concurrencia de todos los requisitos consagrados en el artículo 165 del C.P.A.C.A., especialmente el relativo a la competencia del funcionario judicial para conocerlas todas, puesto que es indispensable el cumplimiento de los factores determinantes de competencia establecidos en la nueva codificación, especialmente el factor de competencia en razón a la cuantía, ya que puede suceder que se acumulen pretensiones relativas a hechos distintos que son conexos, pero al momento de revisar la pretensión económica correspondiente a cada hecho se encuentre que frente a una de ellas no se cumple con el requisito de la competencia en razón a la cuantía, pues las pretensiones económicas acumuladas son independientes y no basta con que una de ellas cumpla el requisito para que todas sean conocidas por el mismo juez. Lo anterior resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que el requisito de competencia respecto de cada pretensión se consagró en la ley para evitar que una declaratoria de terminación anormal del proceso respecto de una de ellas, pudiera llegar a afectar la competencia del funcionario judicial frente a las otras pretensiones acumuladas.

(...)

Una de las novedades que introdujo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo previsto en la Ley 1437 de 2011, fue la posibilidad de que se acumularan en un mismo proceso pretensiones que correspondieran a los medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, previsión que antes de la expedición de la referida ley no se encontraba consagrada en el Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, pues bajo los preceptos de dicha codificación la acción a ejercer dependía básicamente de la fuente del daño y de la temática a tratar –acto administrativo, acción u omisión de la entidad pública, controversia contractual, entre otros-, y no se permitía que se produjera la acumulación de acciones así tuvieran un nexo o conexión común entre ellas, pues se consideraba que eran excluyentes entre sí.

Con el propósito de evitar que un mismo hecho o asunto generara la iniciación de diferentes procesos judiciales en razón a las diferentes fuentes de daño que se pudieran causar, y en atención a los principios de economía, celeridad e igualdad entre las personas inmersas en una misma litis, el legislador estableció en el artículo 165 del C.P.A.C.A. que en aquellas demandas presentadas ante esta jurisdicción con posterioridad al 2 de julio de 2012, era posible acumular pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que estas sean conexas y cumplan los siguientes requisitos (...). De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que, en principio, la acumulación de pretensiones fue establecida para acumular pretensiones que correspondieran a un medio de control distinto; sin embargo, atendiendo la finalidad de la norma, que no es otra sino la de evitar la multiplicidad de procesos respecto de un hecho o asunto común, puede afirmarse que también podrían ser acumulables pretensiones que corresponden a un mismo medio de control, siempre y cuando cumplan los requisitos generales consagrados en el artículo 165 del C.P.A.C.A., pues la circunstancia de acumular pretensiones propias de un mismo medio de control no es oponible con la finalidad de la norma citada.

(...)

La posibilidad de que se acumularan en un mismo proceso pretensiones que correspondieran a los medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, (...) aquellas demandas presentadas ante esta jurisdicción (...) era posible acumular pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que estas sean conexas y cumplan los siguientes requisitos: i) que el juez ante

Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 11001-33-35-026-2019-00508-00

el que sean presentadas sea competente para conocer de todas, salvo en los casos en los que se formulen pretensiones de nulidad, pues en este evento será competente el juez que conozca la nulidad, ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, iii) que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas y iv) que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. (...) también podrían ser acumulables pretensiones que corresponden a un mismo medio de control, siempre y cuando cumplan los requisitos generales.”

Obsérvese, entonces, que en criterio de esta Corporación el artículo 165 del C.P.A.C.A., no prohíbe ni excluye la posibilidad de que puedan acumularse pretensiones, propias de un mismo medio de control, habida cuenta de que la finalidad y propósito del Legislador con dicha disposición legal, fue la de evitar decisiones contradictorias sobre un hecho o asunto común y hacer efectivos los principios de celeridad, economía procesal e igualdad, con la única condición de que se cumplan los requisitos generales previstos en la citada norma, a saber: i) Que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones; ii) Que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias; iii) Que no haya operado la caducidad frente a alguna de ellas y iv) Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

Ahora bien, es de resaltar que el primero de dichos requisitos, es especialmente relevante en los asuntos en que se discuten pretensiones de tipo económico, pues en tales casos, y el de la referencia es uno de ellos, el factor cuantía determina si el juez es competente para conocer de todas ellas. En ese sentido, resulta imprescindible que en la demanda se precise, con toda claridad, cada pretensión. Al efecto, esta Corporación ha dicho que:

“2.1 El artículo 162 del C.P.A.C.A. señala que la demanda deberá contener, entre otros requisitos indispensables, “Lo que se pretenda”, es decir, el petitum, el cual deberá ser expresado con precisión y claridad. 2.2 Tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ha dicho la doctrina que “deberá pedirse la nulidad del acto administrativo y enunciarse clara y separadamente las condenas o declaraciones que se pretendan como consecuencia de aquélla. En otras palabras, el actor, entonces, deberá ser cuidadoso en la formulación del petitum, indicando con toda precisión lo que pretende, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto acusado o del hecho u operación material que causa la demanda”²⁵ (Las negrillas y subrayas no son del texto original).

La Sala estima que la Jurisprudencia transcrita resulta plenamente aplicable al caso concreto, comoquiera que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio fue presentada por un número plural de demandantes, quienes afirman tener la calidad de docentes vinculados al Departamento de Cundinamarca; que, en tal calidad solicitaron a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios de que trata la Ley 91 de 1989 y que a todos y cada uno de ellos, a través de sendos Oficios, les fue negada tal solicitud por el mismo funcionario del Departamento demandado (Directora de Personal Docente de Establecimientos Educativos), y por idéntica razón, esto es, que “NO ES APLICABLE AL PERSONAL DOCENTE”, lo cual evidencia que sí se presentan la identidad de causa y objeto que se requieren para resolver en una misma sentencia el punto controvertido y asegurar de esta manera la finalidad del Legislador al regular la acumulación de pretensiones en materia contencioso administrativa, a saber: la concreción de los principios de economía, celeridad e igualdad y el evitar decisiones diversas frente a un tema común. En tales circunstancias, es evidente que la inadmisión y posterior rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, formulada por los actores, va en contravía de la disposición legal aplicable al caso (artículo 165 del C.P.A.C.A.), cuyos alcances, son los indicados en precedencia.

En efecto, y se insiste en ello, dicha norma permite la acumulación de pretensiones de un mismo medio de control, siempre y cuando se cumplan los requisitos generales allí

previstos, en especial, el de la competencia del juez para conocer de todas ellas, a partir del factor cuantía, cuando se trata de pretensiones de contenido económico, caso en el cual corresponde a la parte actora formular en forma precisa cada una.

Dicho en otras palabras, afirmar que no es posible la acumulación de pretensiones de un medio de control, por parte de varios demandantes, porque tal posibilidad no está expresamente prevista en el artículo 165 del C.P.A.C.A., desborda los postulados mínimos de interpretación jurídica, pues no corresponde a la finalidad del mismo. De esta suerte, como ya se ha dicho, la inadmisión y posterior rechazo de la demanda en el caso de la referencia, con fundamento en una exégesis semejante, constituye un defecto lesivo de derechos fundamentales.”

Así las cosas, este Despacho, en aras de garantizar los principios de acceso a la administración de justicia, y economía procesal, adoptará las disposiciones adoptadas tanto por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como por el Consejo de Estado, y tendrá por configurada, en el presente asunto, la acumulación subjetiva de pretensiones, en los términos establecidos en el artículo 165 del C.P.A.C.A. y 88 del C.G.P. **Razón por la cual se procederá a reponer parcialmente el auto del 6 de diciembre del 2019, en el sentido de conocer la demanda respecto de la totalidad de los demandantes.**

Por ende, al disponer conocer la demanda en su totalidad, y no parcialmente o frente a uno de los demandantes como anteriormente se había estipulado, es necesario, realizar nuevamente el estudio de admisibilidad de la demanda, respecto de la totalidad de demandante, conforme a lo establecido en el artículo 162 del C.P.A.C.A.

Del derecho de postulación

Observa el Despacho que los poderes otorgados por los demandantes fueron conferidos a los abogados Deissy Gisselle Bejarano Hamon y Roger Joan Martínez Vergara. Solo uno (1), de los diez poderes allegados, fue conferido a la abogada que presentó el escrito de demanda, Jhennifer Forero Alfonso.

En tales condiciones, al no existir poder conferido a la abogada Jhennifer Forero Alfonso para instaurar demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en nombre y representación de la totalidad de los demandantes, se conmina a la esta última a allegar poder para actuar en representación de la totalidad de demandantes, conforme a lo establecido en el artículo 74 y siguientes del Código General del Proceso.

De la dirección de notificaciones judiciales

Analizado el plenario, encuentra el Despacho que en el ítem de notificaciones de la demanda, la apoderada registró la misma dirección tanto para ella como para la totalidad de demandantes, y en este sentido no se cumple a cabalidad con el numeral 7° del art. 162 del C.P.A.C.A., el cual reza que la demanda debe contener “*El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.*”

Por ende, se conmina a la apoderada judicial, a efectos de que deberá indique el lugar y la dirección en donde los demandantes, directa y efectivamente, puedan recibir notificaciones, sin que pueda ser la misma del apoderado.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. - REPONER PARCIALMENTE el auto del 6 de diciembre de 2019, en el sentido de conocer la demanda respecto de la totalidad de los demandantes, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del auto.

SEGUNDO.- INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **HECTOR DE JESUS PEREZ GRAJALES, MIREYA STELLA DE JESÚS BARRETO REYES, ANA CECILA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANA CLOTILDE VELANDIA DE JAIME, MIGUEL EDUARDO JAIME CASTRO, GLORÍA INES VELÁSQUEZ ARGUELLO DE OROZCO, NELSY YANIRE GUERRERO MOLINA, JAIRO ESTEBÁN SÁNCHEZ PALENCIA, ELVIA LUZ BASTIDAS GARCIA E IRMA PATRICIA AGUDELO VIEDA** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CA



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **12 DE AGOSTO DE 2020**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**20653c873ad3500541f039d060bb753278bf73dd7baa387186d9535ae5
9b1bb7**

Documento generado en 11/08/2020 12:35:38 p.m.